

Secretaría de Prensa

REFLEXIONES SOBRE LOS ULTIMOS 60 AÑOS DEL ACONTECER
POLITICO NACIONAL, DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR

SANTIAGO, 25 de Julio de 1991.

En verdad, cuando el director de La Segunda me invitó a participar en este acto, no medité suficientemente en la responsabilidad que asumía, y consideré que era una manera de contribuir a elevar el nivel de nuestro debate, al conversar en esta oportunidad sobre el acontecer de Chile en los últimos años.

No se me pasó por la mente que fuera a hacer yo, en esta ocasión, una "clase magistral", como ha anunciado el señor director y dicen las invitaciones. Simplemente quiero formular algunas reflexiones sobre los últimos 60 años sobre el acontecer político nacional.

Nos reunimos esta noche para celebrar los sesenta años del diario La Segunda que, como medio de comunicación ha cumplido, durante este lapso, la delicada misión de informar, interpretar y orientar. En esta labor, La Segunda ha sido a la vez protagonista de la vida chilena, con una continuidad no fácil de lograr, adaptándose a los tiempos y manteniendo su vigencia, motivo suficiente para felicitar a su director, a sus periodistas y a todo el personal del diario.

Los felicito también por haber escogido hacer de este aniversario una oportunidad para meditar sobre nuestra historia. Así comprendo y por ello celebro el inicio de la publicación de las memorias de un testigo privilegiado de este siglo como lo es don Raúl Rettig. El es más que un testigo; es un servidor público a quien los

chilenos le estamos profundamente agradecidos por su labor de ayer y de hoy.

Participo, en esta ocasión, como testigo de un período de la historia de Chile. Cuando La Segunda de Las Ultimas Noticias empezó a circular en las calles de Santiago, yo era un estudiante en el Liceo de San Bernardo. Lo recuerdo como si fuera hoy. Esa tarde mi padre volvió más temprano de los Tribunales y se elevó la bandera nacional en la fachada de nuestra casa. Salimos a caminar, como él tenía la costumbre de hacerlo, y yo, muchacho de 12 años, no sabía bien de que se trataba. Y le pregunté por qué todas las casas estaban embanderadas, y él me dijo que era un día muy importante, porque Chile recuperaba su democracia.

Más tarde, desde la universidad, desde el foro y desde el parlamento, participé con permanente y vivo interés, como testigo o como actor, en esta historia que hoy recordamos. No soy, por ello, un observador distante. Mi mirada no es la de un historiador. Es la mirada desde mi propia vida de hombre de derecho, de profesor universitario, de parlamentario y de político vitalmente comprometido con el destino de mi patria. Hoy, desde la investidura de la función que por voluntad ciudadana desempeño, la mirada del pasado cambia en algo su perspectiva, no porque sea más serena ni porque esté por sobre el bien y el mal, sino porque los deberes de esta función me obligan a hacer un máximo esfuerzo de comprensión y objetividad. Naturalmente, ello no significa que no mire las cosas desde la perspectiva de mis convicciones, de mis ideales, de los valores en que me he formado.

En 1931, Chile vivía el fin de un corto interregno autoritario e iniciaba su restauración democrática. Sesenta años después, venimos superando un largo período autoritario y procuramos consolidar nuestra democracia.

Ambas fechas marcan la resolución de períodos de crisis que reflejan, a su vez, el sentido más profundo que ha orientado la historia del Chile contemporáneo. Ese sentido, a mi juicio, ha sido la búsqueda de una sociedad más justa e integrada, el empeño en hacer de Chile una nación que acoja a todos sus habitantes como miembros partícipes de su destino.

En esta búsqueda y empeño está el trasfondo de ambas crisis, así como el motor que movió el período que las separa.

Frente a esta dinámica -búsqueda de justicia e integración y capacidad de otorgarlas- ha habido distintas posiciones. En un extremo, una posición

conservadora y en cierto sentido escéptica o fatalista, para la cual esa aspiración es una utopía irrealizable, puesto que el progreso sería sólo el fruto del desarrollo natural y cualquier intento por alterar ese curso sería ocioso y contraproducente. En el otro extremo ha existido una posición voluntarista, convencida de la posibilidad de construir una sociedad ideal por la virtud intrínseca de sus postulados, sin considerar mayormente las condiciones de la realidad. Entre ambas posturas se han situado aquellos para quienes, en mayor o menor medida, con más o menos entusiasmo, esa sociedad es la meta hacia la cual se avanza gradualmente. En los períodos de crisis ha prevalecido la confrontación de los extremos; en los períodos de construcción ha predominado el acuerdo para una reforma gradual. Estas posiciones no se identifican exclusivamente con una determinada fuerza política. Todas, con diversa intensidad, se han situado en algún momento en posiciones extremas.

En la década de los 30, Chile logró resolver positivamente la crisis que se hizo manifiesta en el año 20, aquel año mítico en que por primera vez el conflicto político fue expresión de un conflicto social. Se trataba de la pugna de los sectores medios por ingresar al sistema político y por legitimar su sello cultural en la sociedad chilena. Al tiempo que aparecían en escena los primeros signos de presencia proletaria, los sectores medios reclamaban poder y dignidad. Su proyecto de país, expresado en el partido radical y parte del liberal y conducido por el carismático León de Tarapacá, don Arturo Alessandri Palma, era aún difuso, pero figuraban los temas centrales que definirían el período posterior: búsqueda de igualdad, regulación por el Estado del conflicto social, industrialización, fin del parlamentarismo oligárquico y democratización política y social.

Para entender ese proceso, es útil recordar que hasta ese tiempo, al decir de un agudo intérprete de nuestra realidad social, don Carlos Vicuña Fuentes, los chilenos tenían dos apellidos en la clase alta, un apellido en la clase media y ninguno en la baja. Todavía se hablaba, en ciertos sectores de nuestra sociedad, de "gente bien", "siúuticos" y "rotos".

Junto con el protagonismo de la clase media, el año 20 demostró que la "cuestión social" ya no podía estar ausente de la agenda nacional. Allí estaba el proletariado naciente construyendo sus primeras organizaciones: el partido obrero y el sindicato. Los sectores dirigentes tradicionales no comprendieron, en su mayoría, la profundidad de los cambios que se vivían y se empecinaron en un juego político de corto alcance. Ello llevó a la inmovilidad del sistema y a su ruptura el año 24.

El posterior gobierno del entonces coronel Carlos Ibáñez, hizo suyas las banderas progresistas levantadas el año 20 en el terreno económico y social, iniciando una reorganización del aparato estatal, robusteciendo su rol económico tanto en la inversión industrial como en la regulación financiera y dictando el Código del Trabajo y otras leyes sociales. Con ello se asentaron las bases del Chile contemporáneo. Sin embargo, por la naturaleza autoritaria del régimen, ese gobierno fue incapaz de concretar la reforma del sistema político formulada en la Constitución del 25. Esta incapacidad, junto a la grave crisis económica internacional, precipitó su caída.

La sociedad chilena de los años 30 era ya una sociedad compleja y plural. La clase dirigente tradicional había perdido su monopolio y los sectores medios estaban incorporados no sólo a la política y las altas funciones estatales, sino también al mundo de la empresa. El proletariado industrial mejoraba su organización y se hacía presente con creciente influencia. El sistema político instaurado en la nueva Constitución fortaleció al Poder Ejecutivo, como también la presencia organizada de los partidos políticos representativos de las diversas tendencias de la sociedad chilena.

Luego de consolidada la institucionalidad democrática y recuperado el país de la crisis económica-lo que ocurrió en la segunda administración de Don Arturo Alessandri- Chile se vio abocado a nuevos y enormes desafíos: la incorporación del proletariado industrial tanto al sistema político como a condiciones de vida más digna; la industrialización para satisfacer las crecientes necesidades de las grandes mayorías; la incorporación de la mujer a la vida política, social y laboral; la atención educacional de una población cada vez más joven y con disímiles aspiraciones; la renovación tecnológica que permitiera un desarrollo armónico y eficiente; la incorporación de los campesinos, que habían sido los eternos ausentes. Todo ello se fue realizando en el marco de un estado de derecho y tratando de vencer las desigualdades sociales, tan irritantes como injustas, siempre con el norte de lograr la integración de los chilenos a la vida nacional.

En estas tareas el Estado desempeñó un papel fundamental.

La Corporación de Fomento de la Producción fue una de sus más relevantes expresiones. Su pionera acción en el campo de la inversión productiva y de infraestructura fue una actitud señera de un grupo visionario de chilenos, a los cuales Raúl Rettig no es ajeno, y una clarividente opción de supervivencia nacional, puesto

que la crisis económica de 1929 nos había ubicado, según el decir de los especialistas, en el lugar de máximo deterioro y en el umbral del desastre. Sustituyendo importaciones, promoviendo la producción de petróleo, de acero, de electricidad, de remolacha, la fundición de minerales y el desarrollo de la industria manufacturera, el país progresó, creó nuevas fuentes de trabajo, mejoró el nivel de vida de su población y pudo enfrentar las nuevas circunstancias consiguientes a la Segunda Guerra Mundial y su desenlace.

En esta etapa, el Estado fue asumiendo las tareas que el desarrollo demandaba y que, por su naturaleza y las condiciones propias de una sociedad de masas, no podían entonces quedar entregadas al juego del espontaneísmo. La salud pública, la asistencia social, el trabajo y la previsión, la vivienda, la educación, el desarrollo científico y tecnológico, el urbanismo y los transportes, fueron áreas en que el Estado implementó políticas públicas de un claro contenido social.

Cuando, en estos tiempos que vivimos, se ha puesto de moda denigrar al Estado como un monstruo que devora a la sociedad, aniquila a las personas y paraliza la iniciativa creadora, creo un deber de justicia señalar que Chile no tendría su alto nivel de electrificación, ni sus grandes obras de regadío, ni produciría acero, petróleo y remolacha, ni habría desarrollado su mediana y pequeña minería, ni alcanzado los niveles de salud y educación a que ha llegado, y su problema de vivienda sería mucho peor, si el Estado no hubiera asumido las tareas que en esa etapa, especialmente a partir del gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, tomó en sus manos. Y considero también deber elemental de justicia rendir homenaje a las generaciones de servidores públicos que, desde el aparato estatal, desde entidades autónomas o desde las universidades, sirvieron a Chile desinteresadamente, sin afanes de riqueza y con ejemplar abnegación. La noción de que estaban cumpliendo una tarea nacional, contribuyó a generar una mística del servicio público.

Al señalar estos hechos, a mi juicio innegables, no pretendo desconocer que ese proceso involucró un desmedido crecimiento burocrático y contribuyó a generar, con el tiempo, el mal hábito de esperar del Estado la solución de todos los problemas. Sólo quiero poner las cosas en su lugar. Es evidente que en Chile, como en el mundo, las circunstancias han cambiado. Lo que ayer fue necesario y positivo, hoy ya no lo es, al menos del mismo modo y en igual medida.

La actual discusión sobre la dimensión y el rol que deben cumplir el sector público y el privado, no puede desconocer que "la cosa pública" no es una invención

de los ideólogos críticos al capitalismo, sino una cuestión que ha estado presente en pueblos y naciones ya desde que los griegos discutían en el ágora sobre los asuntos comunes.

La referida política de fuerte intervención estatal para impulsar el desarrollo y el cambio social, hizo crisis al desencadenarse, en la segunda administración del Presidente Ibáñez, un agudo proceso inflacionario. La reacción de este fenómeno condujo a la política de restricción financiera y saneamiento económico en que se empeñó el gobierno de don Jorge Alessandri.

Pero el mundo vivía tiempos de convulsión e ideologismo. A las tensiones de la guerra fría, se sumaba una creciente demanda de los pobres y los jóvenes de las más diversas naciones, tanto del mundo desarrollado como de los países en desarrollo, por cambios que les dieran acceso al bienestar y a roles protagónicos. Expresando esa actitud, los estudiantes de París llegaron a tomarse la ciudad esgrimiendo el lema de "seamos realistas, pidamos lo imposible".

En nuestro país, siempre abierto a estar al día con las más modernas tendencias del pensamiento y el acontecer humano, el convencimiento de la necesidad de cambios fundamentales y la voluntad de emprenderlos conquistó a las grandes mayorías. Interpretando esas tendencias, el gobierno del Presidente Frei, bajo el lema "Revolución en Libertad" impulsó la reforma agraria y otras políticas orientadas fundamentalmente a superar el fenómeno de la marginalidad social. Luego, anunciando la instauración del "socialismo en democracia", el gobierno del Presidente Allende, junto con imponer a esas reformas un carácter "drástico y masivo", impulsó un proceso de estatización generalizada de la economía nacional.

La división de los chilenos en tres sectores, cada cual con su propio proyecto de país, y el alto grado de ideologización, intransigencia y violentismo que -crecientemente- fue dominando la convivencia nacional, condujo al quiebre del sistema. Es obvio que el intento de imponer un modelo minoritario es incompatible con la democracia. Por lo demás, como lo dijimos en el Senado en julio de 1973, a esa altura la mayoría de los chilenos había perdido la fe en la solución democrática para la crisis que el país vivía. De una parte, había quienes veían en las formas democráticas un obstáculo inaceptable para llegar al socialismo; de otra, aparte de los grupos minoritarios que nunca creyeron en la democracia, cada día eran más los que, considerándola incapaz para garantizar el orden, pensaban que sólo una dictadura militar podría restablecer la autoridad indispensable en toda

sociedad.

Se produjo así el colapso democrático del cual recién venimos saliendo.

Nuestra calidad de actores en esos acontecimientos nos priva de autoridad para hacer un juzgamiento objetivo. Ellos están, por lo demás, demasiado cerca en el tiempo para que puedan ser evaluados con la necesaria perspectiva y objetividad.

Con todo, no temo ser injusto ni incurrir en grave error al formular algunos juicios.

Pienso que Chile, al comienzo de la década de los 70, a pesar de su alto grado de polarización y de conflicto, era una nación en franco desarrollo y progreso.

En lo político, el pueblo participaba mayoritariamente en la decisión de su destino. Mientras en las elecciones de 1932 había votado el 7,6% de la población del país, en las de 1973 lo hizo el 37,3%. El interés por la "cosa pública" era real en todos los sectores de la sociedad chilena y se expresaba, de manera muy especial, en la actividad parlamentaria. A partir de los años 30, en el Congreso Nacional se fue configurando un modelo de hacer política y de intentar resolver los problemas nacionales, mediante el debate -apasionado a veces, generalmente racional- que incorporó a nuevos partidos, grupos y familias ideológicas. Ese Parlamento fue reflejo del pueblo y en su seno, especialmente en Comisiones, se plasmaban importantes acuerdos. Regían plenamente en el país las libertades públicas; nunca nadie habló de violaciones a los derechos humanos y las instituciones del Estado funcionaban normalmente, dentro del Orden Constitucional.

En lo económico, el país crecía a un promedio -en el decenio de los 60- de 4,5% anual y, si bien la inflación se mantenía alrededor del 30% al año, el ahorro interno superaba el 16% del producto e importantes inversiones aumentaban la capacidad productiva nacional, en electricidad, cobre, acero, industrias químicas, petroquímicas, textiles, metalmecánicas y electrónicas, plantas de celulosa y de azúcar de remolacha y muchas otras actividades.

Pero era, especialmente, en lo social, donde el país había experimentado la mayor transformación. A la consolidación de la influencia predominante de la clase media, sucedió la incorporación sucesiva a roles de participación activa en los diversos sectores de la vida nacional, del proletariado obrero minero e industrial, del

campesinado y del mundo poblacional. Las organizaciones sindicales, vecinales, campesinas y cooperativas se multiplicaron y fueron instrumento de maduración e influencia para grandes sectores de chilenos modestos. El hombre y la mujer de nuestro pueblo llegaron a ser mucho más "personas". Y sus posibilidades de educarse, de atender su salud y de hacer valer sus derechos e intereses en la sociedad, crecieron considerablemente.

¿Y qué decir de los últimos veinte años?

Sin lugar a dudas, fueron traumáticos. Nunca Chile estuvo más dividido ni sufrió tanto, desde la guerra civil del 91. Jamás hubo tanto odio y tanta violencia.

En estos años los chilenos aprendimos lo que son los derechos humanos, por aquello de que de los bienes más preciados -como el aire, el agua, la salud- sólo se toma conciencia cuando faltan. El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación ha golpeado la conciencia moral de los chilenos. Y a cuántos la tengan, seguirá golpeándolas.

Pero, aparte de los muertos ¿qué queda?

En el orden político, un Estado reducido -lo que es bueno-, pero no por ello más ágil ni mucho menos burocrático. Y una nueva Constitución que, con respecto a la anterior, tiene avances y retrocesos, pero que nació huérfana de la base consensual indispensable para que sea perdurable. Por ello juzgo necesario buscar los acuerdos que permitan corregir sus rasgos autoritarios y hacerla plenamente democrática.

En el orden económico, un grave endeudamiento externo, muchas dudas sobre buena parte de lo sucedido, pero un indesmentible avance de eficiencia, modernización y crecimiento. En los últimos años la producción se diversificó y las exportaciones crecieron espectacularmente. La economía de mercado, libre, abierta y competitiva, ha significado un progreso muy notable.

En el orden social, una enorme deuda con un tercio de la población nacional, sumida en la pobreza, a la que la prosperidad de la economía no ha llegado. Mientras los sectores de mayores ingresos aumentaron su participación en la renta nacional, los pobres la disminuyeron.

De este cuadro derivan los grandes desafíos que tenemos por delante:

democratizar las instituciones, perseverar en el crecimiento y modernización de nuestra economía y hacer justicia social. En estas tareas, precisamente, mi gobierno está empeñado, y para ello busco el acuerdo y apoyo de todos mis compatriotas.

No sería completa esta breve reseña de los últimos 60 años de la vida política nacional, si no agregara algunas reflexiones sobre lo que el Cardenal Silva Henríquez ha llamado, con razón, "el alma de Chile"

Nuestra historia como nación independiente posee algunos rasgos cuya permanencia define su identidad. El primero de ellos, que nos ha distinguido en la comunidad internacional, fue nuestro tradicional respeto por el estado de derecho y por las instituciones. Chile fue el primer país del continente que restableció el orden luego de la Independencia, y lo logró porque confió su estabilidad a la fundación de instituciones y no al poder azaroso de un caudillo. Nuestras instituciones han sido flexibles para adaptarse a los cambios. También han entrado en crisis, pero son ellas las que nos han permitido recuperar nuestra convivencia cuando ella se ha roto. El respeto al derecho y a las instituciones no se improvisa. Es fruto de un largo aprendizaje histórico, es tradición. Por ello nos ha dolido tanto perder nuestra continuidad democrática y nos ha dado tanta alegría recuperarla, como el hijo pródigo que finalmente vuelve a casa.

Los chilenos también hemos demostrado en nuestra historia una voluntad de entendimiento para avanzar hacia el progreso por el camino de las reformas. Cuando se mira nuestra vida independiente, es posible concluir que el entendimiento ha prevalecido por sobre la confrontación y la integración por sobre la exclusión. Nuestros momentos de crisis duros y dramáticos, se han producido justamente cuando hemos abandonado esos rasgos de nuestra identidad. Los períodos de confrontación han profundizado la exclusión con la imposición de proyectos que no concitan la mayoría ciudadana, sin la cual podrán haber cambios, pero no hay proyecto nacional ni garantía de estabilidad.

Por el contrario, los períodos en los cuales los chilenos hemos logrado establecer un proyecto nacional que incorpore y trascienda los intereses sectoriales, son los que han permitido que la justicia y la integración social logren avanzar.

Nada más lejos de mi voluntad que hacer un panegírico o esconder nuestros errores. Debemos ser críticos de nuestra historia, porque necesitamos aprender de

ella, así como debemos ser agradecidos de nuestra historia porque nos alimentamos de ella.

El país ha aprendido duramente la lección de su pasado reciente. Los proyectos globales y minoritarios están destinados a terminar con el dolor de muchos. Por ello hoy día, tanto el Gobierno que presido como la gran mayoría del país, estamos empeñados en la construcción de consensos estables en pos de las grandes metas nacionales. Consolidar la democracia y lograr un crecimiento económico sostenido con justicia social, es nuestro gran desafío.

Es conveniente, sin embargo, hacer algunas precisiones respecto de la política de los consensos. Chile es hoy una sociedad plural donde conviven distintas instituciones, culturas, ideologías, partidos políticos, organizaciones sociales. Para que cada una de ellas sea respetada en sus derechos y pueda desarrollarse libremente, se requiere de un entendimiento general sobre nuestras normas básicas de convivencia. No se trata de uniformar a la sociedad ni a los partidos. Se trata, por el contrario, que cada uno tenga el derecho a profundizar su propia identidad. Buscamos consensos para avanzar sin rupturas en la tarea de integrar a la sociedad chilena.

Yo no le temo a la diversidad, le temo a la exclusión. No le temo a las disonancias; le temo al dogmatismo. No le temo a quien lucha por un ideal; le temo a quien en su nombre mata o agrede a otro ser humano.

Esto significa que la política de los consensos no debe ser interpretada como una política del mínimo común múltiplo, del realismo pragmático sin ideales ni convicciones. Una política de esa naturaleza está condenada al estancamiento, porque a las sociedades las mueven los ideales y los valores, la pasión por construir un mundo mejor.

Seamos claros. Los consensos no mueven la historia, sólo la posibilitan. La historia no la hace una mano invisible, ni el curso natural de las cosas, ni el juego espontáneo de fuerzas abstractas. La historia la hacemos los hombres y mujeres que tenemos fe en un proyecto de nación.

Esos hombres y mujeres que con sus valores han movido nuestra historia, concitan nuestra admiración. Cuando entré por primera vez al palacio de la Moneda como Presidente de la República, vi en sus paredes los retratos de nuestros grandes

estadistas y escogí a dos para tener cerca mío: el del joven Bernardo O'Higgins y el del sabio Andrés Bello. Ellos representan para mí los dos cauces más valiosos de nuestra historia. O'Higgins porque era un hombre cargado de ideales y patriotismo que no midió el costo personal de sus pasos y se entregó a ellos con pasión, como soldado en tiempos de guerra, como estadista en tiempos de paz. Y Bello, porque siendo un hombre de ideales, supo llevarlos a cabo escuchando la realidad para encauzarla sin herirla. Queremos una historia con la audacia y valentía de O'Higgins y con la solidez y sabiduría de Bello.

En la última década, el mundo ha presenciado enormes cambios. Chile ha formado parte de ellos. Somos hoy más contemporáneos del mundo de lo que lo fuimos nunca antes. Mientras otros pueblos derrumbaban con sus manos el muro del totalitarismo, nosotros con nuestras manos depositamos el voto en la urna electoral para reconquistar nuestra democracia. Y toda la población votó, porque Chile no es un país de escépticos.

Hoy, cuando en todas las latitudes de la tierra los valores de la democracia se consolidan, la economía se internacionaliza, el comercio busca romper las barreras para llegar a todos los mercados, Chile está plenamente incorporado a estos fenómenos con el esfuerzo de su pueblo.

Hemos aceptado los desafíos de cambio del mundo moderno y lo estamos haciendo, guiados por los mismos valores que han inspirado la mayor parte de nuestra historia, con el mismo ideal de construir una sociedad libre, justa e integrada. Nuestro gran norte sigue siendo hacer de Chile una nación en la cual todos sus hijos se sientan pertenecientes y partícipes.

Los instrumentos pueden no ser los mismos, porque los tiempos son distintos. Ello nos indica la necesidad, en cada momento de la historia, de ir pulsando el signo de los tiempos para impulsar el futuro. Y comprender que la flexibilidad en los instrumentos no significa flexibilidad en los valores.

Chile requirió en el pasado de un gran impulso estatal para avanzar en el crecimiento y en la equidad. No soy de los que miran con nostalgia el pasado, pero estoy convencido de que ello nos ha permitido, en gran medida, transitar hoy día hacia una nueva fase donde el impulso fundamental está radicado en la sociedad misma. Este parece ser el signo del nuevo tiempo.

Señoras y Señores:

Soy de los que un día dijo "todo tiene que cambiar". Fue sin duda, más que una exageración, un craso error. Siempre hay algo que cambiar, más o menos, pero nunca todo. Hoy soy de los que valorizan positivamente la historia de Chile de estos sesenta años, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, ha habido un proceso acumulativo donde las experiencias se han ido sumando y hemos progresado en nuestra integración nacional. No obstante, no soy de los complacientes y sigo pensando que queda mucho por cambiar. Soy, por lo tanto, de los inconformistas que queremos hacer marchar la historia.

Sigue vigente el desafío de impulsar en nuestra patria una sociedad integrada y ello significa derrotar la pobreza, vencer el abismo entre ricos y pobres, lograr para todos sus habitantes posibilidades de una vida buena.

Chile es la tierra de nuestros padres y es la tierra de nuestros hijos. A esta tierra tan amada de nuestros padres, le debemos gratitud y respeto. A la tierra de nuestros hijos, le debemos la promesa de legarles una sociedad más próspera, más justa, más humana. Esta es la tarea que la hora reclama de todos los chilenos.

Muchas gracias.

* * * * *

SANTIAGO, 25 de Julio de 1991.

M.L.S.